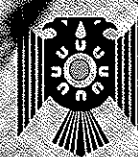


# HOJAS ECONOMICAS

REVISTA DE LA FACULTAD DE ECONOMIA  
Centro de Investigaciones Economicas  
NUEVA EPOCA - No. 3 - Año 2 - DICIEMBRE 1994 - \$3.200.00



FUNDACION  
UNIVERSIDAD CENTRAL

# ***Elementos para una caracterización de la política económica y social del gobierno de Samper***

*Jairo Estrada Alvarez  
Director Centro de Investigaciones  
Profesor Facultad de Derecho - Universidad Nacional*

**S**on múltiples las expectativas que ha generado la administración del Presidente Samper en diversos sectores de la opinión pública en torno a la política económica y social. Tales expectativas se iniciaron con el lema de la campaña electoral de «ponerle corazón a la apertura» y se concretaron en el discurso de posesión con el anuncio del Plan del Salto Social. «La política social en mi gobierno, aseveró Samper, no será la hermana menor de la política económica. Vamos a demostrar que sí se puede hacer política económica con criterios sociales y política social con criterios económicos»<sup>1</sup>.

El propósito gubernamental pareciera fundamentarse en la conciliación del proyecto de acumulación con el bienestar social, y -por ende- en una reorientación de la estrategia neoliberal de la reestructuración capitalista, consolidada en el cuatrenio de Gaviria.

En el presente trabajo, se intentará una caracterización -desde la economía política- de algunos elementos principales de la política económica y social del Gobierno de Samper. En desarrollo de ese objetivo, se propone su ubicación en el contexto de la reestructuración capitalista, lo cual implica -de una parte- el predominio de un enfoque de proceso sobre lo puntual o lo técnico-económi-

co. Y de la otra, el tratamiento del objeto en dos planos: Primero, en cuanto escenario de configuración y objetivación de los intereses de las distintas fracciones que conforman el bloque dominante en el poder. Segundo, en tanto terreno de la conflictividad trabajo-capital<sup>2</sup>.

## **POLITICA ECONOMICA Y ESTRUCTURACION MONOLITICA DEL BLOQUE EN EL PODER**

Si se reconoce el carácter de proceso de la reestructuración capitalista iniciada en la década de los setenta y consolidada durante la administración Gaviria, no existen argumentos para fundamentar una reorientación substancial de la estrategia neoliberal<sup>3</sup>. Tampoco es posible constatar aún la presencia de rasgos neoestructuralistas de la política económica, como se infirió por algunos analistas al conocerse la configuración del equipo económico del Presidente.

La transición de una estrategia neoliberal hacia una estrategia neoestructuralista de la reestructuración supone cambios en la actual concepción sobre las modalidades de inserción de la economía colombiana en la econo-



mía internacional, y el papel y la función del Estado. Para ello no parecen estar dadas todavía las condiciones, por cuanto se priorizan medidas de estabilización (política monetaria y cambiaria como eje de la política antiinflacionaria), y se comprenden éstas como garantes de crecimiento hacia el mediano y el largo plazo. Asunto distinto, es la forma de diseño de la política. Es evidente el interés por una construcción más consensual, aunque subordinada a los propósitos globales del capital. Tal construcción, que se puede situar en un plano técnico de la política económica, pretende basarse en una conciliación de las diferentes fracciones del capital hacia una estructuración monolítica.

En el plano económico, los elementos centrales de la política de Samper están marcados por los trazos ya definidos de los procesos de internacionalización (transnacionalización) de la economía y de reforma del Estado capitalista. Al respecto hay consenso en el mundo del capital. El Estado ha actuado como «capitalista ideal». Eventuales diferencias se han propuesto más bien en los instrumentos de política, lo cual es el resultado de los intereses particulares de las fracciones del bloque dominante en el poder. A ello se ha respondido, por parte del

Gobierno, con una notoria preocupación por «hacer concesiones», que además de tener dividendos políticos, no generan o representan inestabilidad para la estrategia global de la reestructuración:

- El capital productivo -industrial y agrícola- ha presionado medidas tendientes a mejorar sus condiciones de competencia frente al capital transnacional y el capital bancario. Ello se expresa principalmente en las medidas de desaceleración de la revaluación<sup>4</sup> (por ejemplo, con decisiones de control al flujo de capitales externos), de exigencia al control del contrabando y de requerimientos para un manejo moderado de las tasas de interés. Y para los capitalistas del agro, adicionalmente, de cierta protección y de manejo de política de precios (restauración de aranceles, franjas, concertación de precios sobre compra anticipada de cosechas)<sup>5</sup>.

- El capital cafetero ha logrado presionar una política de desregulación estatal de los precios del café, para ajustarlos automáticamente a los precios en los mercados internacionales -especialmente ahora, cuando se sostiene una tendencia a su mejor cotización por las heladas en el Brasil-, lo cual puede interpretarse como una privatización de los beneficios de la minibonanza cafetera en favor de los grandes intermediarios en la comercialización del grano<sup>6</sup>.

- El capital financiero continúa beneficiándose de los efectos de la reforma financiera (ley 45 del 90) con el tránsito de la banca especializada a la banca múltiple, y de la eliminación del control de cambios que ha hecho de la compra-venta (y lavado) de dólares uno de los principales negocios del sector. Medidas gubernamentales que pudieron afectar la liquidez del sector, no parecen incidir sobre su tasa de rentabilidad ante el mantenimiento de un margen de intermediación financiera de carácter especulativo.

- El capital comercial, por su condición intermediaria, se sostiene como uno de los beneficiarios principales de la política de apertura. No obstante, se podría ver afectado por medidas contraccionistas de demanda, que presionan el Banco de la República y el Banco Mundial.

Pese a que es evidente la presión de las diversas fracciones del capital por imponer medidas en su favor, y del Gobierno de Samper por responder a tales requerimientos, debe considerarse que la existencia de poderosos grupos financieros relativiza la particularidad de esos intereses. En los últimos años se ha asistido a un nuevo ciclo de profundización de la integración vertical y horizontal de la actividad económica en pocos grupos financieros (Santodomingo, Ardila Lule, Sarmiento Angulo, Sindicato Antioqueño, etcétera) que vienen copando los nue-

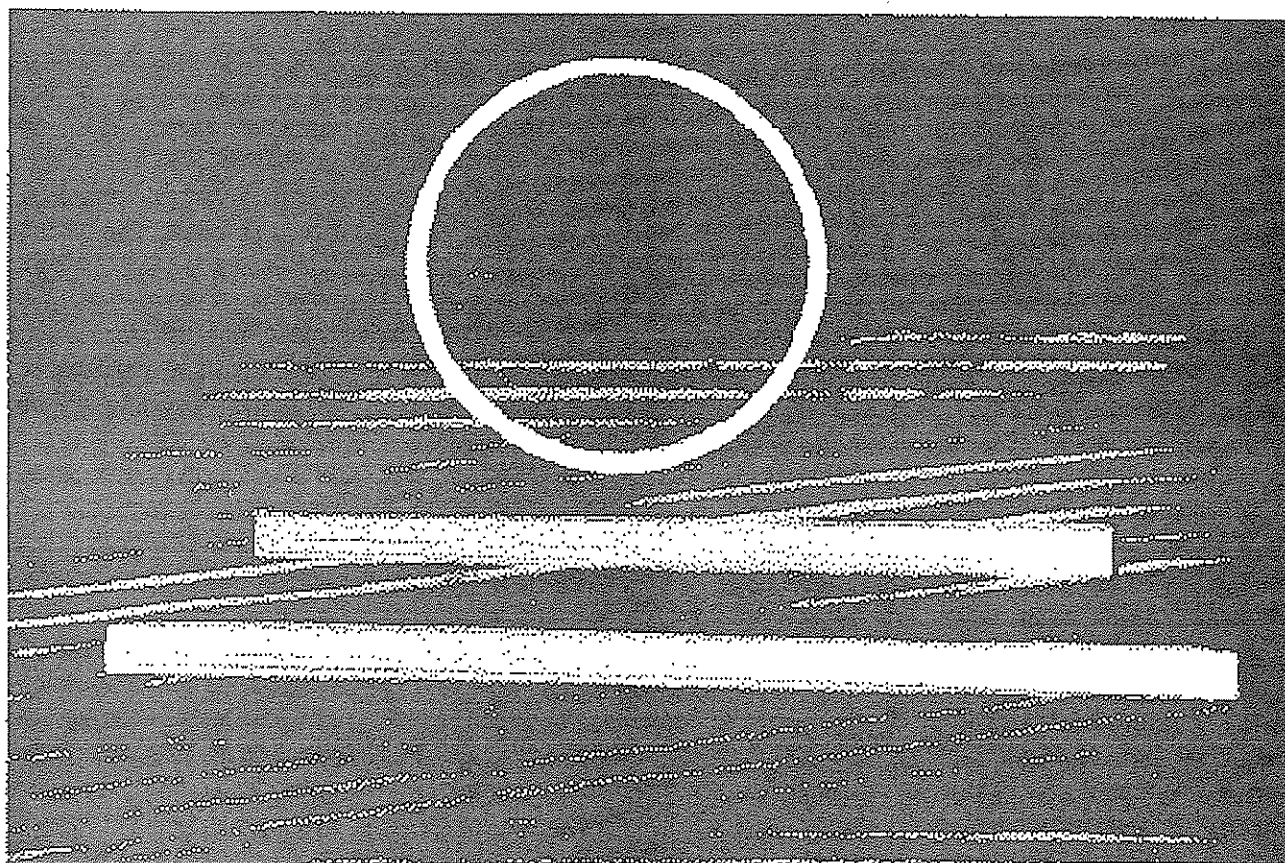
vos espacios de capitalización<sup>7</sup> total de la sociedad (pensiones, salud, cesantías, telecomunicaciones, servicios públicos domiciliarios, empresas industriales y comerciales del Estado en proceso de reestructuración -virtual privatización-)<sup>8</sup>.

Si en la administración Gaviria primaron los intereses del capital financiero y comercial, la administración Samper pareciera intentar una mayor cohesión entre las diferentes fracciones del bloque. Ello se manifiesta en los intentos de reconciliar las posiciones en torno a la política fiscal (de relativa austeridad por la vía de la desaceleración del gasto público) y del control a la inflación, como propósito principal. Las diferencias entre el equipo económico del gobierno y la Junta Directiva del Banco de la República hacen parte de esa «puja». No debe olvidarse que es recurso del Estado capitalista tramitar éstas en forma institucionalizada, «permitiendo» contradicciones en el seno del aparato estatal. Las posiciones se reconcilian igualmente en torno a las líneas gruesas de la política de seguridad y de justicia, como instrumentos fundamentales para la preservación del orden en proceso de construcción.

En esa misma dirección, pero haciendo referencia a las relaciones entre «tecnócratas» y «políticos», Urrutia

señala: el «fenómeno de que los políticos acepten las metas globales de gasto impuestas por los tecnócratas tiene sentido, pues la clase política enfrenta un dilema colectivo. Cada político debe maximizar el gasto público destinado a su electorado, pero si el gasto total aumenta mucho, habrá inflación y una crisis económica que perjudicaría a todos los representantes del partido de gobierno y sus colaboradores. En esas circunstancias, la clase política en el poder acepta atarse las manos y entregarle la decisión del gasto global a un ente tecnocrático. La competencia política se limita a la repartición de ese monto global de gasto público»<sup>9</sup>.

Las anteriores reflexiones conllevan la intención de proponer la consolidación de una tendencia hacia la estructuración monolítica, por tanto, excluyente y antidemocrática del proyecto de acumulación capitalista en su actual etapa. Tal tendencia se expresa adicionalmente, por ejemplo, en los acuerdos en el bloque dominante de poder respecto del manejo de la política petrolera y de los recursos que generará la explotación de los yacimientos en el Casanare. Asunto que parece determinante para la estabilidad en el largo plazo de la estrategia de acumulación. Otra cosa son las disputas en torno a la política tributaria (presiones para reducción del



IVA y del impuesto a la renta, según lo establecido en la segunda reforma tributaria de Gaviria), que indican pretensiones de las fracciones del capital por apropiarse de parte del ingreso del Estado.

El propósito de estructuración monolítica cuenta, no obstante, con varios límites que lo pueden hacer inconsistente y vulnerable:

Primero, aquel que proviene de las contradicciones con la estrategia de reestructuración del capitalismo central. El discurso del libre mercado, de la competitividad en los mercados internacionales y de la eficiencia aparece doblegado por las pretensiones de las transnacionales, de los Estados capitalistas desarrollados y de los organismos de regulación supranacional que no tienen reparos en imponer sus propósitos independientemente de los intereses de sus «aliados» criollos. Si durante la administración Gaviria se intentó resolver ese problema por la vía de garantías plenas a la inversión extranjera y a la penetración indiscriminada de capitales foráneos, hoy es evidente que no existe la pretendida reciprocidad. Ni siquiera está definida, en la práctica, en los mal llamados acuerdos de integración subregional. De generalizarse tendencias que han afectado la tasa de ganancia de algunos capitalistas criollos (por ejemplo, de exportadores de textiles, banano, flores, atún etc.), redefiniciones de política podrían ser inevitables.

La política de selectividad y de reciprocidad formulada por Samper en la campaña electoral -como uno de los nuevos rasgos de la apertura económica durante su mandato- no ha superado el nivel de la retórica.

Segundo, aquel que proviene de la persistencia del conflicto armado con la insurgencia. En este campo, las posiciones desde el Estado capitalista aparecen más contradictorias. De un lado, se manifiesta el interés por el diálogo y la negociación, que bien puede responder a la intención de imprimirle estabilidad política y seguridad al proyecto de acumulación. Del otro, se adelanta la conformación de un complejo militar-industrial con el inicio de

la producción de armas, que se puede entender como un componente estratégico de mayor militarización del proyecto de acumulación, y da lugar a la irrupción de nuevos espacios de capitalización de gran apreciación por el capital privado. La guerra se entiende así como una industria con perspectivas de alta rentabilidad económica.

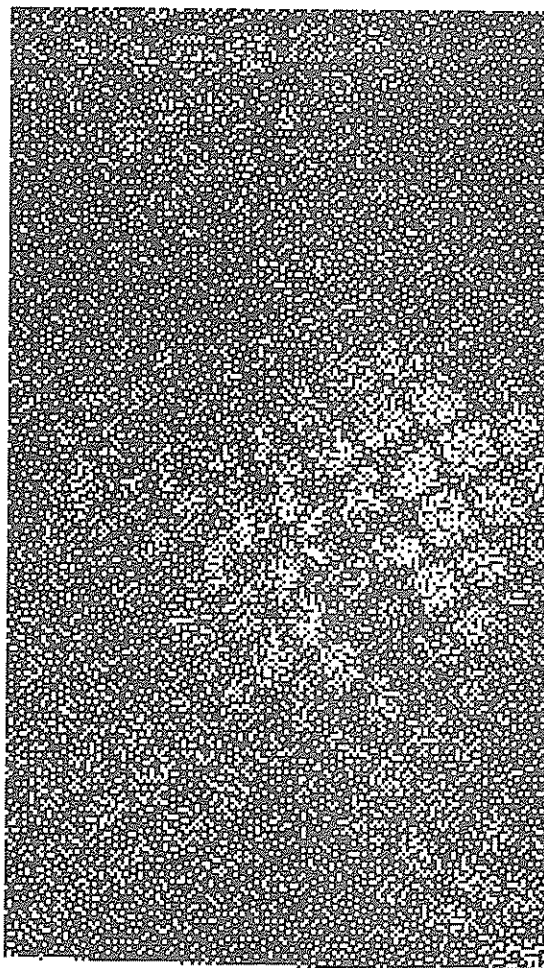
Tercero, aquel que proviene de las indefiniciones en materia de política contra el narcotráfico y que se expresa en la relación contradictoria entre la política de sometimiento a la justicia impulsada por sectores del capital y de los políticos, y la política de confrontación directa que presiona la DEA y el Departamento de Estado<sup>10</sup>. Lo cierto es que el proyecto de acumulación requiere la incorporación definitiva del capital del narcotráfico al circuito legal de la reproducción<sup>11</sup>.

En cuarto lugar, aquel que proviene de la carencia de una base social, que lo legitime. Si inicialmente los fundamentos legitimadores pudieran resultar del discurso en torno al «nuevo país» que surgiría de un nuevo «contrato social» con la Constitución de 1991, ahora es evidente que ese plano discursivo pareciera agotarse con los magros resultados en la construcción del «Estado social de Derecho».

La construcción de una base social se entiende como un proceso complementario al proceso de desestructuración de la clase obrera en el sentido de la «reducción de la fuerza de trabajo a una suma de individuos», con el propósito de organizarla «desde el punto de vista de las determinaciones del capital»<sup>12</sup>. La estrategia del capital, en ese aspecto, ha comprendido componentes institucionales y parainstitucionales<sup>13</sup>.

El proyecto de construcción de base social posee al menos dos componentes principales:

- Un componente objetivo, que proviene: Primero, de los impactos diferenciados de la apertura económica, que favorece a sectores de las capas medias y de la clase obrera, al posibilitarles un nivel de ingresos que permite su acceso al mercado de bienes de consumo im-



portados, y que se ve reforzado por el estímulo de una política de consumo al debe con la ampliación de los servicios de las tarjetas de crédito y la flexibilización de las condiciones de endeudamiento privado. Es la vía de la cooptación mediante el consumo, que despierta ilusiones de ascenso y movilidad social. De paso, se genera mercado para pequeños y medianos capitalistas vulnerables a la apertura y se les incorpora de esa forma al proyecto de acumulación. La segmentación del mercado capitalista se muestra como fórmula salvadora para estos capitales. Segundo, de las nuevas generaciones de trabajadores, especialmente de trabajadores estatales (profesionales), sin ninguna tradición de lucha, que desconocen las conquistas históricas del proletariado, y son cooptados con buenos ingresos<sup>14</sup>. Tercero, de trabajadores «beneficiados» con los programas de readaptación laboral y de estímulo a la microempresa, que son vinculados al circuito mercantil informal, y por tanto, atomizados.

Este componente objetivo, se mantendrá durante la administración Samper.

- Un componente político, que nos sitúa en el terreno de la política social, la cual merece una atención especial<sup>15</sup>.

### POLITICA SOCIAL PARA LA LEGITIMACION DE LA ESTRATEGIA DE ACUMULACION

Las posibilidades de política social en la administración Samper parecen estar fundadas en la prolongación de la fase expansiva del ciclo económico en el resto de la década. En efecto, la perspectiva de mayores ingresos por concepto de café en 1995 (entre US\$1.500 y US\$1.800 millones) y de petróleo a partir de 1996 hace pensar que existen condiciones favorables para reorientar el crecimiento económico en función de los intereses de la mayoría de la población, para hacer realidad los propósitos programáticos del Estado Social Derecho proclamado por el Constituyente de 1991.

Así mismo, una reorientación hacia lo social crearía las bases para desactivar factores estructurales causantes de fenómenos de violencia, y sería una contribución significativa en la búsqueda de una solución política negociada al conflicto armado colombiano.

No obstante, si se someten a estudio los contenidos del gran salto social anunciado por Samper, todo indica que se trata, más bien, de un lánguido brinquito. Y que no



se insinúa una ruptura con la concepción de lo social de los gobiernos anteriores. Ni siquiera en el discurso. ¡Veámos por qué!

Los ejes de lo social de la actual administración se plantean en dos planos. De un lado, la propuesta de «Acuerdo social sobre salarios, precios y productividad», más publicitada como «Pacto Social». Del otro, la «Red de Solidaridad Social» (RSS). La forma principal de medir sus alcances está definida por la estructuración del presupuesto de gasto público para los años venideros, por cuanto es en ese escenario donde se confronta el discurso con la realidad.

Con el «Pacto Social» se daría cubrimiento a los trabajadores con contrato laboral, vinculados por la relación salarial al mercado capitalista; y con la RSS a «los grupos de población más pobre y vulnerable».

La propuesta de «Pacto Social» tiene como propósito la lucha contra la inflación, por cuanto ésta se considera como el principal causante de pobreza e inequidad en la distribución del ingreso. La estabilidad general de precios es la condición para ajustar expectativas de los agentes económicos y garantizar crecimiento. Si hay crecimiento hay prosperidad general (empleo, mejores ingresos, seguridad en los negocios). Es la vieja fórmula de la teoría neoclásica, desempolvada por el ex Ministro del Trabajo y

Seguridad Social, Luis Fernando Ramírez, cuando lanzó la propuesta de fijación de salarios en función de la productividad.

En la trasescena del proyectado «Pacto Social» está la pretensión de «descontaminar» el mercado de la fuerza de trabajo de la incidencia sindical (política) en la fijación de los salarios, para someter estos al exclusivo efecto de las leyes de la oferta y de la demanda, y a las determinaciones del capital. En tendencia se asistiría al desmonte de la precaria - pero en todo caso, aún significativa- función reguladora que posee el salario mínimo para establecer mínimos legales que marcan pautas para incrementos salariales de los trabajadores no organizados y sirven de referente de negociación de convenciones colectivas de trabajo. Si junto a ello, se considera la propuesta de pactar aumentos salariales con fundamento en el índice de precios al consumidor esperado, la pretensión de despolitizar la negociación colectiva del salario resulta más clara.

El «Pacto» significa la intención gubernamental de desatenderse de los trabajadores con relación laboral, y que su situación social sea determinada por las leyes del mercado capitalista.

Ello coincide con el diseño de políticas sociales del Banco Mundial y otras agencias internacionales, que pro-

ponen su «focalización» o restricción a los sectores desvinculados del mercado dada su situación de pobreza extrema. En esa perspectiva, los esfuerzos de gasto social deben encaminarse a superar las condiciones de marginación que afectan a amplios sectores de la población<sup>16</sup>. Justamente ahí, se sitúa la propuesta de la RSS.

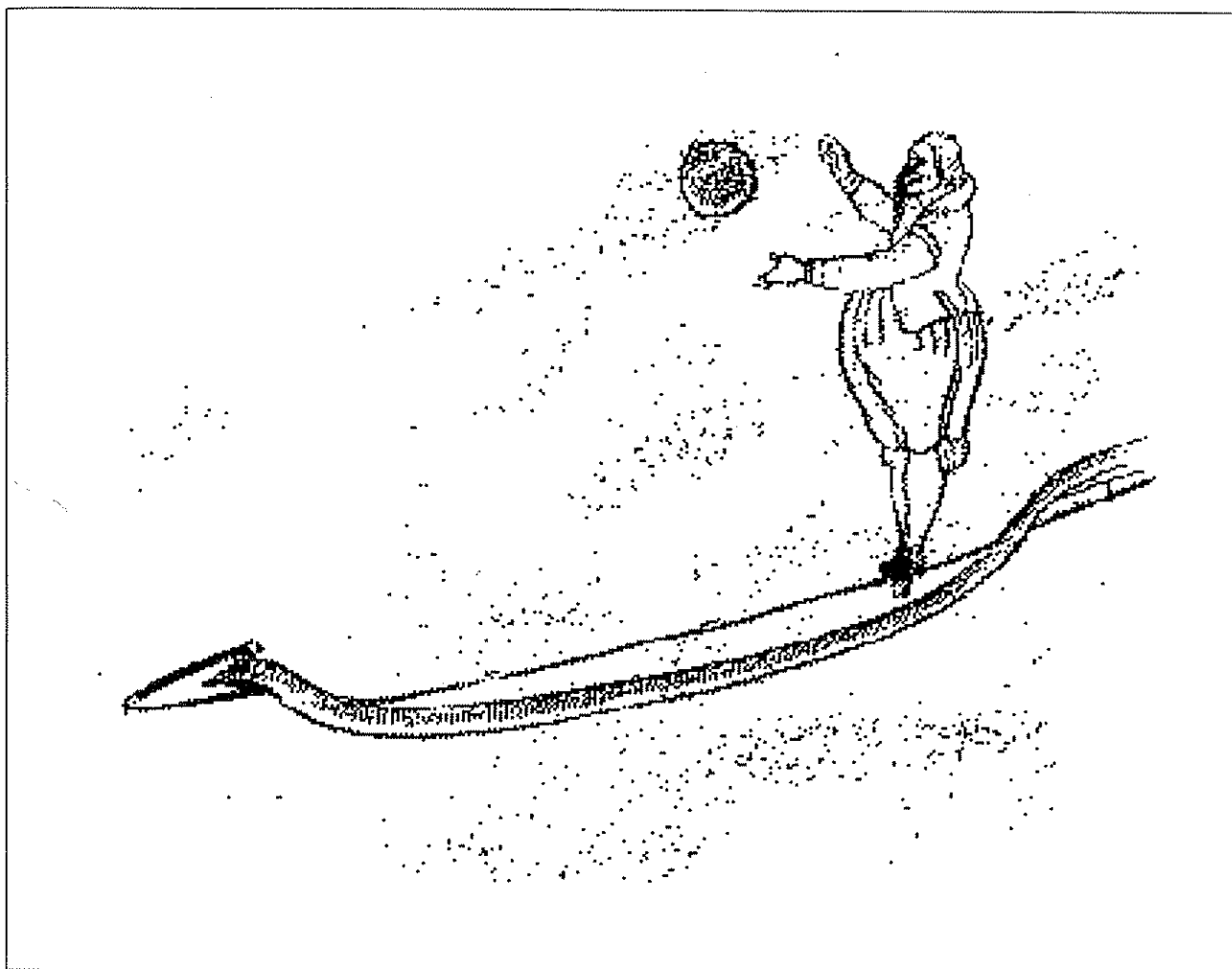
La RSS es definida como «un conjunto de programas dirigidos al mejoramiento de la calidad de vida de la población más pobre y vulnerable»<sup>17</sup>. Su sentido es asistencialista, pero dentro de las estrategias del solidarismo neoliberal (corresponsabilidad, cofinanciación, coparticipación; acción conjunta del Estado, del sector privado y de la población objeto)<sup>18</sup>. Los recursos propuestos son exiguos en relación con el nivel de necesidades (\$3.7 billones para cuatro años, con financiación externa y de las entidades territoriales, equivalente a no más del 1 por ciento al año con relación al PIB). Según se observa en el cuadro no. 1, los resultados a esperar por el impacto de la RSS no deben superar significativamente aquellos de las administraciones anteriores; se trata más bien de paleativos a la difícil situación de segmentos de la población pobre del país, con los que el mandato constitucional de priorizar el gasto social sobre cualquier otra asignación aparece como dádiva del gobernante<sup>19</sup>.

**RED DE SEGURIDAD SOCIAL: BENEFICIARIOS Y COSTOS POR PROGRAMA**  
1994-1998  
(Pesos constantes de 1994)

PROGRAMAS	BENEFICIARIOS	COSTO DEL PROGRAMA *	BENEFICIARIO AÑO **	BENEFICIARIO MES ***
EMPLEO SOLIDARIO	343.000	628.106	457.804	38.150
ASISTENCIA ALIMENTARIA	1.390.000	330.346	59.415	4.950
APOYO A MUJER JEFE DE HOGAR	150.000	31.300	52.216	4.350
AUXILIO PARA ANCIANOS INDIGENTES	240.000	322.490	335.927	28.000
VIVIENDA RURAL	300.000	300.000	250.000	20.833
VIVIENDA URBANA	500.000	1.000.000	500.000	41.666
RECREAR ****	1.700	15.300	2.250.000	-
TALENTOS DEPORTIVOS Y ARTISTICOS	9.000	4.752	132.000	11.000

\* En millones de pesos/\*\* Promedio en pesos/\*\* Promedio en pesos/\*\*\*\* Parques y áreas recreativas

FUENTE: Cálculos del autor con base en: Documento CONPES 2722 - DNP:UDS-Misión Social, Santafé de Bogotá, agosto 10 de 1994.



A juzgar por pliego de modificaciones al proyecto de presupuesto de 1994-1995, aprobado por el Congreso, no hay evidencia de una manifiesta voluntad para inducir una reestructuración del gasto público hacia un mayor peso significativo de lo social. La adición de \$492.000 millones, de los cuales poco más de la mitad se orientarán al financiamiento de la RSS, no fue significativa respecto de un presupuesto de \$17.38 billones de pesos, cuya composición indica que el 58 por ciento corresponde a funcionamiento, el 17.6 a servicios de la deuda y el 24.1 a inversión.

Si bien es cierto que a pesos corrientes se registró un incremento de la participación del gasto público social de 37.94 a 45.7 por ciento, también lo es -de acuerdo a Asobancaria- que «el crecimiento del presupuesto del 95 es inferior al del PIB nominal, lo cual indica que la participación (real) del gasto público total es más baja que en el presente año»<sup>20</sup>. De hecho, la administración Samper ha desacelerado el incremento del gasto de 52.9 por ciento en la vigencia anterior

al 20.5 por ciento para el período 1994-1995<sup>21</sup>.

Resulta problemático, en consecuencia, esperar un cambio significativo en la política social de Samper. Es posible que se avance en los intentos de configurar una base social que legitime el proyecto de acumulación y que se mantengan expectativas en amplios sectores de la población. No debe olvidarse, sin embargo, que lineamientos fundamentales de la reestructuración capitalista, consolidados en la administración anterior, se mantienen, y aún están por sentirse con mayor fuerza sus impactos: En lo económico, la mal llamada internacionalización, y el proceso de reforma del Estado; en lo social, las reformas laboral, a la seguridad social, a la salud y a la educación. Pese a que se presentan las posibilidades económicas de dar un verdadero «salto social», no parece existir la decisión política para ello, pues inquieta más la llamada estabilidad macroeconómica. Hasta el momento, las propuestas de política económica y social se inscriben -en lo esencial- en una línea de continuismo respecto de las administraciones anteriores.

## NOTAS Y REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- <sup>1</sup> Ver: Discurso de posesión del Presidente Samper, El Tiempo, 8.08.1994, p.8a.
- <sup>2</sup> Se entiende aquí por «caracterización» una primera aproximación, con siderando que aún no existen suficientes elementos de juicio para una definición categórica de la política económica y social del Gobierno. Lo esbozado hasta ahora insinúa, en todo caso, la forma como se relacionará desde la Administración la política con el proceso de reestructuración capitalista.
- <sup>3</sup> Para una caracterización del proceso de reestructuración capitalista, ver: ESTRADA ALVAREZ, Jairo, Reestructuración capitalista, modelo de desarrollo y Constitución Política, Revista HORIZONTES, No. VII-VIII, 1993/1994
- <sup>4</sup> El anuncio de las metas macroeconómicas para 1995, que contemplan una aceleración de la devaluación a 13.59% (6.8% en 1994) a tiempo que una reducción del índice de inflación a 17%, es un indicador de ello.
- <sup>5</sup> Sarmiento Palacio habla de la continuación del «desmante de la apertura iniciado por la administración anterior» (El Espectador, 16.09.1994, p.4B). Recuérdese que en materia de política agrícola, la administración Gaviria debió reconocer el impacto negativo de la orientación neoliberal sobre el sector al «negociar» con los agricultores una reformulación de la política en el Ministerio de José Antonio Ocampo.
- <sup>6</sup> No obstante, debe anotarse la persistencia de las fricciones entre la Federación de Cafeteros y la Asociación de Exportadores privados, que es una expresión de la disputa por el manejo de los recursos que deja el comercio del grano.
- <sup>7</sup> El concepto de capitalización se entiende en tanto la respectiva actividad se subsume a la lógica y las determinaciones exclusivas del capital.
- <sup>8</sup> Sobre la estructuración actual de los grupos financieros, ver: Separata AVANCE, El Tiempo/CEDE/Confecámaras, EL TIEMPO, 19.09.1994, p.21-41
- <sup>9</sup> La conciliación de intereses entre tecnócratas y políticos es notoria en la relación Banco de la República-Gobierno. Las reglas del primero «le dan autonomía en el manejo macroeconómico a una tecnocracia, pero hacen imposible que el Banco se utilice como fuente de apoyo político». A tiempo que «las instituciones y la práctica política concentran la decisión del monto global del gasto público en el Ejecutivo y en el Ministerio de Hacienda». URRUTIA MONTOYA, Miguel, Economía política del manejo de la bonanza petrolera, Planeación y Desarrollo. Edición Especial, Mayo de 1994, p.205-206. Debe advertirse que se admite la presunta neutralidad de los tecnócratas con fines expositivos. Ella es posible frente a intereses particulares de las fracciones del bloque, más no frente a las determinaciones globales del capital.
- <sup>10</sup> Esta última pareciera convenir más desde la perspectiva de la guerra contrainsurgente. En el lustro pasado buena parte de la ayuda militar estadounidense contra el narcotráfico se ha destinado a la confrontación armada con la guerrilla. La identificación del fenómeno insurgente con el narcotráfico se inscribe en esa estrategia.
- <sup>11</sup> Un paso definitivo en ese sentido se dio con la ley 49 del 1990 y el nuevo estatuto cambiario que permitieron la repatriación de capitales y la eliminación del control de cambios; para convertir la economía en una gran lavandería de dólares. El auge de la industria de la construcción -pilar de la fase expansiva del ciclo económico-, el crecimiento de la actividad hotelera y turística y la dinámica de industrias y exportaciones no tradicionales se han explicado, en buena medida, por la presencia de dineros del narcotráfico. La Junta Directiva del Banco de la República ha reconocido en el próximo pasado en los flujos de capital del narcotráfico un factor importante del incremento de las reservas internacionales.
- <sup>12</sup> BILBAO, Andrés, Obreros y ciudadanos. La desestructuración de la clase obrera, Editorial Trotta, Madrid, 1993
- <sup>13</sup> Ver: ESTRADA ALVAREZ, Jairo, Reestructuración capitalista y criminalización de la lucha obrera, Revista IZQUIERDA, no. 26, 1994
- <sup>14</sup> Tal fenómeno se aprecia en algunas instituciones del aparato estatal, principalmente en los de justicia y de seguridad (fuerzas armadas). Es significativo que el despido de más de 100.000 trabajadores estatales durante la administración Gaviria no se haya traducido en una reducción de la participación del gasto público por concepto de servicios personales dentro del total de los gastos de funcionamiento del Estado. La flexibilización de la contratación laboral con el nuevo régimen de contratación administrativa facilita la incorporación de fuerza de trabajo calificada en la forma de asesores y consultores, con ingresos integrales relativamente altos respecto del nivel promedio en el mercado de trabajo. Al mismo tiempo, esa política discriminatoria ha originado descontentos y fuertes presiones por el mejoramiento del ingreso en otros segmentos de la población de los servidores públicos: es el caso de los maestros y los médicos.
- <sup>15</sup> En adelante me apoyo en mi trabajo ¿Gran salto social o simplemente un brinco?, Revista COLOMBIA HOY, no. 128, Bogotá, 1994
- <sup>16</sup> Ver: Documento CONPES 2722-DNP: UDS-Misión Social, 10.08.1994
- <sup>17</sup> Ibid.
- <sup>18</sup> Para una caracterización del nuevo concepto de política social, ver: RESTREPO, Dario/ NOVOA, Edgar, Globalización y Estado Nación. Las políticas sociales de la nueva era, SINAP-ESAP, 1994 (Documento de Trabajo). Libardo Sarmiento afirma que la RSS «refleja una gran continuidad con el enfoque neoliberal del gobierno Gaviria: asistencialista, simple reencauche de los programas de la anterior administración, manejados con criterio desinstitucionalizado, clientelista y con acciones que atomizan los recursos, con efectos de corto plazo y dependencia en los beneficiarios», en: Institucionalidad y Política Social, Caja de Herramientas, no.20, p.17.
- <sup>19</sup> Ver: FRANCO, Saul, Del Revolucion al gran salto social, El Espectador, 28.08.1994, p.11A
- <sup>20</sup> El Espectador, 21.09.1994, p.3B.
- <sup>21</sup> Contrasta ello, con la decisión de producir fusiles Galil, lo cual puede representar el inicio de la conformación de un complejo militar industrial, en momentos en que las industrias de guerra se ven sometidas internacionalmente a procesos de reconversión hacia industrias civiles. Ahí se puede estar abriendo un «boquete» para la expansión del gasto militar, creando las bases para una eventual prolongación del conflicto armado con la insurgencia.

